

Retención abusiva de dividendos y derecho a la herencia

La novedosa sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona, de 6 de febrero de 2018, anula un acuerdo social de reparto de dividendos en una empresa familiar por considerarlo abusivo, y condena a la sociedad demandada a repartir entre los socios la cantidad destinada a reservas voluntarias del ejercicio impugnado de forma proporcional a su cuota de participación en el capital social, supliendo mediante el pronunciamiento judicial la propia voluntad de la sociedad.

Linda Guerra Henríquez. Procesal. Madrid

La política de dividendos es una de las cuestiones que mayores conflictos genera en el ámbito de las sociedades familiares. La empresa se vuelve más complicada cuando del reparto de esos beneficios dependa que los socios minoritarios reciban su parte de la herencia del fundador.

En esta ocasión, la juez titular del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona, en su sentencia de 6 de febrero de 2018, declaró la ineficacia de un acuerdo social, adoptado en el seno de la junta general de una sociedad familiar, en el que se destinaba gran parte del beneficio del ejercicio a reservas voluntarias.

En contra de lo que ha venido defendiendo la jurisprudencia más o menos consolidada –y consciente de ello–, la juez mercantil condenó a la sociedad demandada a distribuir entre los socios la parte que se había destinado a reservas voluntarias en el acuerdo impugnado.

Las actoras, quienes adquirieron la condición de socias al 19,6 % de la mercantil demandada como consecuencia del reparto de la herencia de su padre, interpusieron, entre otras, una acción de impugnación del acuerdo social adoptado en la junta general de junio de 2015 relativo a la aplicación del resultado del ejercicio por considerarlo abusivo.

Las demandantes instaban a que se declarase la ineficacia del acuerdo en la medida en que, si bien la junta general aprobó distribuir una parte de los beneficios, las accionistas-actoras no estaban conformes con que se destinara una proporción tan elevada a reservas voluntarias (50 % del beneficio del ejercicio). A ello se añadía que desde el año 1989 no se habían repartido dividendos y las reservas representaban en el momento de la adopción del acuerdo más del 85 % del patrimonio neto.

El acuerdo impugnado no solo restringía el derecho del socio a participar en las ganancias de la compañía a través de los dividendos, sino que impedía «disfrutar de la herencia de su difunto padre», por lo que cualquier cobro de la legítima dependía precisamente de la rentabilidad que le diera a esas acciones.

La sentencia realiza una exposición clara y detallada del conjunto de intereses que se contraponen en la política de dividendos de una empresa familiar. Destaca, por un lado, el interés de los socios gestores de optar por una política de retribución más conservadora y destinada a la reinversión de los beneficios; y se contraponen, por otro lado, el interés de los socios más desvinculados de la gestión, quienes serán más proclives al reparto continuo de los beneficios.

Los enfrentamientos se acentúan cuando los beneficios sociales constituyen, en realidad, la herencia de los socios minoritarios. La juez propone que en esos casos se efectúe un escrutinio más riguroso de las decisiones adoptadas por la mayoría en aras de lograr un «justo equilibrio» entre el respeto del derecho a la libertad de empresa y la salvaguarda y tutela de los derechos del socio minoritario para protegerlo frente a posibles abusos de la mayoría del capital social.

Bajo esa premisa, la sentencia estimó parcialmente la demanda y declaró la ineficacia del acuerdo social adoptado. La juez efectúa una valoración crítica de la prueba practicada (incluidas periciales económicas) y concluye que la decisión empresarial de continuar aumentando las reservas voluntarias no solo no en-

contraba justificación económica razonable, sino que se había adoptado en contra de los intereses y derechos de los socios minoritarios.

Para llegar a esa conclusión, la juez apela a los siguientes elementos de naturaleza económica: (i) los óptimos resultados de la compañía; (ii) inexistencia de previsión de gastos extraordinarios; y (iii) acreditada solvencia de la compañía (los peritos concluyeron que el reparto del 100 % de los beneficios del ejercicio no pondría en riesgo la sostenibilidad de la compañía en el corto y medio plazo).

Estimada la acción de impugnación del acuerdo social, la sentencia condenó a la sociedad demandada a repartir entre los socios la cantidad destinada a reservas voluntarias de ese ejercicio de forma proporcional a su cuota de participación en el capital social. La sentencia no esconde que la condena a la sociedad demandada a repartir dividendos es una cuestión discutida en la jurisprudencia, que viene negando de forma sistemática tal posibilidad.

Según esta corriente jurisprudencial, la labor del juez debe limitarse únicamente a declarar la ineficacia del acuerdo, obligando al órgano de administración a convocar nueva junta para aprobar un nuevo reparto, pero no puede sustituir la voluntad social¹.

No obstante, en el caso objeto de estudio concurrían ciertas particularidades que llevaron al juzgado a adoptar una postura alternati-

1.- Vid. por todas, sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 7 de mayo de 2014 (AC 2014,1115).

va. Y ello en la medida en que carecería de sentido obligar al administrador único de la empresa a convocar nueva junta para aprobar un nuevo reparto de beneficios cuando de la prueba práctica quedó acreditado que cualquier acuerdo que no consistiera en el reparto del 100 % de los beneficios obtenidos en el ejercicio seguiría siendo abusivo.

Por último, cabría preguntarse la virtualidad que tendrán pronunciamientos como el aquí comentado con el derecho de separación por falta de reparto de dividendos del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

De momento, y sin que existan extensos pronunciamientos jurisprudenciales al respecto,

nos inclinamos por pensar que nos encontramos ante dos instrumentos jurídicos claramente diferenciados y con objetivos diversos.

Ahora bien, un análisis casuístico de la cuestión nos lleva a concluir que las decisiones que tome la junta general respecto del reparto de beneficios (y, en especial, la falta de reparto de estos o el reparto en una proporción menor a la considerada como «económicamente razonable») podrán dar lugar, bien a una acción de impugnación del acuerdo en cuestión, o bien al ejercicio del derecho del socio minoritario a separarse de la compañía.